Barranquilla, 2023-04-14

Señores magistrados

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA

Atte.- M. P. Dr. Alfredo Castilla Torres

E. S. D.

Ref.: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA DE

CARLOS OTERO JANNA CONTRA ALEJANDRO MANUEL

DEL CASTILLO G. Y PATRICIA MARIA RIOS LEMUS.

RAD. 08001315301320210029200

RAD. Interno No. 44632

En mi condición de apoderado judicial de la señora PATRICIA MARIA RIOS LEMUS, demandada en el proceso de la referencia, mediante el presente escrito oportunamente descorro el traslado ordenado mediante auto de 30 de marzo de 2023, notificado por estado del día 31 del mismo mes y año que corre, para sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el día 3 de marzo de 2023 por el Juzgado Trece Civil del Circuito, lo cual desarrollo en los siguientes términos:

DE LA DECISION RECURRIDA

En el convencimiento de que se configuraron los presupuestos para dictar sentencia anticipada, el despacho a su cargo lo hizo "por cuanto las pruebas solicitadas por la parte ejecutada como el testimonio de la señora DELIA ROSA OROZCO AVENDAÑO, son ineficaces, inútiles, e innecesarias y no habiendo otras pruebas que practicar y como, no concurren vicios que puedan generar nulidad de lo actuado, por hallarse demostrados los elementos necesarios para proferir sentencia. "

REPAROS CONCRETOS A LA DECISION

Sustancialmente el reparo que se hace contra la referida sentencia anticipada, es el de que, muy a pesar de las razones que esgrimió la primera instancia para considerar cumplidos los requisitos para proferirla, al razonar que es ineficaz, inútil e innecesaria la declaración pedida de la trabajadora doméstica de mi representada, señora DELIA ROSA OROZCO AVENDAÑO, lo cierto del caso es que con ello se está evitando la posibilidad de acreditar el alegado hecho de falsedad en la fecha de creación del título valor presentado para el recaudo ejecutivo, motivo por el cual, entre otros, se presentó denuncia penal contra el demandante para que se investiguen tales hechos, la cual se encuentra radicada en el ente investigador con el NUC 080016001067202163518.

Por lo anterior, la decisión de desestimar la declaración que se pidió y proferir la decisión que se reprocha, llevaría el proceso a un estadio en el que, de ser confirmada ésta, sólo podría terminar con pago de la deuda o transacción, no obstante poder resultar tipificado y acreditado el delito presuntamente cometido por el ejecutante.

Así las cosas, y ante la noticia que tuvo aquella instancia de la referida

denuncia penal, lo que correspondía era suspender el proceso por la causal prevista en el artículo 161, del Código General del Proceso, que dispone:

“ El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:

1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvencción. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.”

Como el A quo emitió sentencia anticipada, no sólo aniquiló la oportunidad para que se le pidiera la suspensión prevista en la norma citada, sino que desconoció la existencia de la denuncia penal de los hechos que investiga la Fiscalía General de la Nación, de cuyo resultado depende el que pueda dictar la providencia que defina la controversia.

Lo anterior porque, si el ente investigador encuentra probados los hechos denunciados, podrá imputar el delito de falsedad ideológica en documento privado previsto en el artículo 287 del Código Penal, por haber consignado en el documento como fecha de creación una anterior a aquella en la que efectivamente se suscribió y se le entregó, faltando a su deber de verdad con el propósito de iniciar el cobro ejecutivo. De contera, también supondría la imputación de aquel injusto en concurso con el de fraude procesal (Art. 182 ibídem), por haberlo utilizado en el presente proceso con el propósito de hacer incurrir en error al juez que libró mandamiento de pago creyendo que

se le decía toda la verdad en los datos y fechas que se consignaron en el título valor objeto de recaudo ejecutivo.

Por esa razón resulta apresurada la sentencia anticipada que se pide revocar y suspender el proceso hasta cuando sea resuelto el injusto penal investigado, pues, de encontrarse hallado que al título valor se incluyó fraudulentamente como fecha de creación una distinta a la real y por suma superior a la debida, se impone la obligación de declarar probada la respectiva excepción propuesta.

De no practicarse la prueba que persigue demostrar la falsedad en la fecha de creación de la letra de cambio presentada para el cobro ejecutivo, se desestimaría lo que en nombre de mi representada excepcioné, con efectos tales como si hubiese dejado de utilizar el mecanismo de defensa que en esta clase de procesos establece la ley procesal: las excepciones.

La primera instancia consideró que la fecha consignada en la letra de cambio no podía ser otra que aquella en que se procedía al lleno de los espacios en blanco, pero la firma de tales documentos se dieron en fecha posterior a la impuesta en ese título valor, lo cual pretende probarse con la referida declaración y con ello se configuraría, además de la excepción que en tal sentido se propuso, la presunta comisión de los referidos delitos cuyos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

La recriminada decisión implica el desconocimiento del medio idóneo dispuesto por la ley para oponerse al monto de la obligación contenida en el título valor, pues, la referida posición que con respecto a las pruebas pedidas y desechadas contiene la discutida sentencia, involucra los mensajes de datos cuyo contenido también se están dejando de valorar, ya que los chats aportados como pruebas demuestran el valor real de la deuda y, sobre todo,

porque la valoración probatoria de ellos tiene que hacerse en conjunto con las instrucciones transcritas literalmente en el documento que se anexó a la letra de cambio.

Así las cosas, la consideración del despacho equivale a decir que no hubo oposición por parte de mi representada para atacar la validez de la obligación consignada en la letra de cambio a través de los medios exceptivos previstos para el efecto, cuando fue precisamente eso lo que se hizo oportunamente, es decir, en momento posterior al mandamiento de pago y mediante excepciones perentorias, alegándose el cobro en exceso de la deuda y falsedad en la fecha de creación del título.

De esta manera dejo debidamente sustentada la apelación interpuesta, pidiendo revocatoria de la indicada providencia.

Atentamente,

HERNANDO JOSE DEL CASTILLO GUZMAN

C. C. 72.268.323 Barranquilla

T. P. 146.831 H. C. S. De La J.